

71. Con respecto al proyecto de principio III-1 sobre los acuerdos de paz, que contiene recomendaciones que todas las partes en conflictos internacionales o internos deberían seguir en las situaciones posteriores a un conflicto, el orador duda que sea posible colocar a todas esas partes en pie de igualdad sin distinción entre ellas, máxime cuando los acuerdos de paz celebrados después de conflictos internos rigen situaciones muy concretas. En primer lugar, es posible que una de las partes ya no exista. En segundo lugar, el hecho de dirigir las mismas recomendaciones sobre el contenido de un acuerdo de paz a las partes legítimas e ilegítimas de un conflicto interno, ¿no equivale a conferir legitimidad a las partes que no la tienen? En tercer lugar, ¿por qué debe firmarse obligatoriamente un acuerdo de paz después de un conflicto armado interno? En cuarto lugar, si no se abordan las consecuencias transfronterizas de un conflicto armado interno ni las consecuencias con efectos *erga omnes*, ¿por qué la defensa del medio ambiente debe regularse a nivel internacional? En vista de lo que antecede, el orador cree que habría que limitar las partes a las que va dirigido el proyecto de principio III-1 únicamente a los Estados o restringir el ámbito de aplicación de ese principio a las situaciones posteriores a los conflictos armados internacionales.

72. El proyecto de principio III-2 suscita el mismo tipo de reflexiones, puesto que cabe preguntarse si los Estados pueden o desean hacer un llamamiento muy general a las antiguas partes en todos los conflictos armados internos para que cooperen, aunque sea únicamente en cuestiones ambientales, cuando parece necesario estudiar la idoneidad de esa cooperación caso por caso. En cuanto al párrafo 2 del proyecto de principio III-3, impone obligaciones a todas las partes en un conflicto armado, independientemente de su naturaleza, de modo que los comentarios de los proyectos de principio III-1 y III-2 se aplican *mutatis mutandis*.

73. Con respecto al título del proyecto de principio III-3, el orador señala, como complemento de las observaciones formuladas por otros miembros de la Comisión, que, cuando termina un conflicto armado, la prioridad es satisfacer las necesidades básicas de la población, y que la remoción de los restos de guerra es fundamental para garantizar la seguridad de las personas. Dado que, para realizar este tipo de operaciones, es preciso tener en cuenta, entre otras cosas, la disponibilidad de recursos, una obligación incondicional, como la que propone la Relatora Especial, no se basa necesariamente en el derecho internacional general ni en la práctica de los Estados.

74. En lo tocante al proyecto de principio III-4, con respecto al cual el Sr. McRae planteó la posibilidad de establecer la obligación de eliminar los restos de guerra en el mar, el orador no está seguro de que sea fácil imponer esa obligación y considera necesario investigar la cuestión con mayor detenimiento. En cualquier caso, desea que se actúe con prudencia cuando se examine si conviene introducir una disposición en materia de responsabilidad por la presencia de restos de guerra o su no eliminación. Es bien sabido que, después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados depositaron en los fondos marinos armas químicas peligrosas y agentes químicos producidos en Alemania. Dado que esos agentes no estaban prohibidos por

el derecho internacional en ese momento y que los aliados se libraron de ellos pensando en sus propios intereses y, según el orador, también en el interés general, cabe preguntarse qué entidad debe asumir la responsabilidad de esos actos, de los daños ambientales o de la no eliminación de dichos agentes, ya que es difícil encontrar un fundamento para hacer a un país responsable de esos daños, por no hablar de que, según los expertos, no se sabe si no sería más perjudicial para el medio ambiente sacar esos productos del mar que dejarlos donde están. En ese contexto, sin duda no será fácil resolver la cuestión de la responsabilidad.

75. El proyecto de principio III-5 parece referirse a las situaciones posteriores al conflicto, pero su fórmula introductoria da a entender que se trata de una obligación de comportamiento en tiempo de conflicto armado y, como ha dicho ya, el orador considera que no es realista establecer una obligación de esa índole durante un conflicto armado.

76. En conclusión, aunque el análisis de los proyectos de principio le parece un ejercicio muy delicado porque los límites entre los aspectos examinados son muy borrosos, el orador es partidario de remitir los proyectos de texto al Comité de Redacción, salvo los proyectos de principio I-3 y IV-1. Da las gracias a la Sra. Jacobsson por la importante labor llevada a cabo y espera que su informe sea una fuente de inspiración para la labor futura en esta esfera.

*Se levanta la sesión a las 12.45 horas.*

## 3321ª SESIÓN

*Viernes 15 de julio de 2016, a las 10.00 horas*

*Presidente:* Sr. Pedro COMISSÁRIO AFONSO

*Más tarde:* Sr. Gilberto Vergne SABOIA (Vicepresidente)

*Miembros presentes:* Sr. Al-Marri, Sr. Caflisch, Sr. Candiotti, Sr. El-Murtadi Suleiman Gouider, Sra. Escobar Hernández, Sr. Forteau, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sra. Jacobsson, Sr. Kamto, Sr. Kittichaisaree, Sr. Kolodkin, Sr. Laraba, Sr. McRae, Sr. Murase, Sr. Niehaus, Sr. Park, Sr. Peter, Sr. Petrič, Sr. Singh, Sr. Šturma, Sr. Valencia-Ospina, Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wako, Sir Michael Wood.

## Organización de los trabajos del período de sesiones (continuación\*)

[Tema 1 del programa]

1. El PRESIDENTE dice que la Mesa aún no ha podido ultimar todos los aspectos del proyecto de programa de trabajo, que se presentará a la Comisión lo antes posible.

\* Reanudación de los trabajos de la 3315ª sesión.

Entretanto, se celebrará una sesión plenaria el lunes 18 de julio de 2016, a las 15.00 horas, para que la Comisión pueda seguir examinando el tema del *ius cogens*. El Relator Especial sobre ese tema resumirá el debate al día siguiente, tras lo cual la Relatora Especial sobre el tema de la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados resumirá el debate sobre dicho tema. Posteriormente, si queda tiempo, se reunirá el Comité de Redacción sobre el tema del *ius cogens*.

**Protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados (continuación) (A/CN.4/689, cap. II, secc. E, A/CN.4/700, A/CN.4/L.870/Rev.1, A/CN.4/L.876)**

[Tema 7 del programa]

TERCER INFORME DE LA RELATORA ESPECIAL (continuación)

2. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar su examen del tercer informe de la Relatora Especial sobre la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados (A/CN.4/700).

3. El Sr. NIEHAUS desea dar las gracias a la Relatora Especial por su excelente tercer informe sobre un tema complejo y muy pertinente en el mundo contemporáneo. El informe incluye un considerable volumen de material y ofrece un análisis particularmente útil del debate sobre el tema mantenido en la Sexta Comisión.

4. Reitera el apoyo que expresó con anterioridad a la decisión de la Relatora Especial de dividir el tema en tres fases: antes del conflicto, durante el conflicto y después del conflicto. No obstante, tal y como han comentado otros miembros, habría resultado útil que el informe enunciara con mayor claridad las normas que se aplican durante cada una de esas tres fases. El contenido y las conclusiones del tercer informe, que se centra en la identificación de las normas aplicables en la tercera fase, reflejan tan solo en parte la metodología seguida. En aras de una mayor claridad, se debería haber centrado en los aspectos más importantes del tema, dejando a un lado asuntos de menor relevancia, como los acuerdos internacionales de inversión, a los que se alude en los párrafos 115 a 120. Las numerosas referencias a la jurisprudencia de tribunales regionales de derechos humanos en los párrafos 196 a 212 no parecen sentar una base clara para las conclusiones que trata de extraer la Relatora Especial. En lugar de facilitar la comprensión del tema, la cantidad de información expuesta a menudo la dificulta. Cuanto más específico es un informe, más fácil resulta para la Comisión analizarlo y lograr un resultado positivo. Siguiendo con el tema de la claridad, el orador desea respaldar el llamamiento del Sr. Candioti para que se utilice una terminología uniforme, coherente y sistemática, cuya ausencia ha suscitado confusión en los últimos años. La resolución de las cuestiones terminológicas no debe estar reservada al Comité de Redacción, dados los efectos perjudiciales que el uso deficiente de la terminología puede tener en los trabajos de la Comisión.

5. El orador pasa a comentar los proyectos de principio y expresa su apoyo al proyecto de principio I-1, pero sugiere que se reformule para aclarar que los Estados tienen la obligación de tomar medidas para proteger el

medio ambiente en relación con los conflictos armados. Si bien valora positivamente que se haya incluido una alusión a las organizaciones internacionales en el proyecto de principio I-3, coincide con otros colegas en que, en la primera oración, las palabras «se alienta» no son lo suficientemente categóricas y deben ser sustituidas por un término jurídico más específico. El proyecto de principio I-4 parece reafirmar el proyecto de principio I-3; además, tal y como ha señalado el Sr. Forteau, las operaciones de paz no forman parte de los conflictos armados, excepto en circunstancias muy excepcionales. Está de acuerdo con el Sr. Petrič en que el proyecto de principio III-1 es incompleto, en tanto que no aborda las cuestiones de la indemnización y la responsabilidad. Las palabras «se alienta» deben ser sustituidas en los proyectos de principio III-1 y III-2 por las razones expuestas anteriormente. Como ha sugerido el Sr. Hassouna, se deben unir los proyectos de principio III-3 y III-4; el orador también comparte la opinión de que la lista de restos de guerra que figura actualmente en el proyecto de principio III-3, párrafo 1, no debe ser exhaustiva. La cuestión del acceso a la información y el intercambio de esta, de la que se ocupa el proyecto de principio III-5, es de gran importancia, si bien de gran complejidad. Hay que detallar en mayor medida el texto para que el proyecto de principio pueda aplicarse efectivamente en la práctica.

6. El proyecto de principio IV-1, relativo a los derechos de los pueblos indígenas, ha suscitado gran debate y opiniones en contra. A pesar de su firme apoyo a los derechos de los pueblos indígenas y su condena de los terribles actos cometidos contra ellos en todo el mundo durante el colonialismo, el orador se pregunta si el tema objeto de examen es el marco apropiado en el que abordar los abusos que las comunidades indígenas sufrieron y siguen sufriendo. No cabe duda de la responsabilidad histórica de poner fin a esos abusos, pero, y aunque le resulte difícil decirlo, el proyecto de principio IV-1, en su formulación actual, no encaja en la estructura general de los proyectos de principio. Por ello, sugiere modificarlo para que rece así: «En caso de conflictos armados, los Estados están obligados a cooperar y celebrar consultas con los pueblos indígenas asentados en su territorio, para asegurar el respeto, en todo momento, de sus conocimientos y prácticas tradicionales, en relación con sus tierras y entorno natural, así como su consentimiento libre, previo e informado en relación con el uso de sus tierras y territorios que entrañe consecuencias importantes para las mismas».

7. Hechos esos comentarios, el orador es partidario de que se remitan al Comité de Redacción todos los proyectos de principio que figuran en el tercer informe de la Relatora Especial.

8. Sir Michael WOOD desea agradecer a la Relatora Especial su tercer informe, de enorme interés, fruto de una rigurosa labor de investigación. Valora positivamente la extensa bibliografía, que quizás podría resultar incluso más útil si se dividiera en secciones que se correspondieran con los diversos asuntos contemplados en los proyectos de principio. Suscribe gran parte de lo que ya se ha dicho a lo largo del debate, en particular los comentarios del Sr. Forteau sobre la metodología. El informe es largo y detallado, pero no siempre es fácil apreciar qué

materiales han dado pie a cada uno de los proyectos de principio y cuáles figuran como referencia.

9. En relación con el alcance del tema, el orador recuerda que en 2015 el Comité de Redacción aprobó provisionalmente una disposición según la cual los proyectos de principio se aplican a la protección del medio ambiente antes de un conflicto armado, durante el conflicto y después de este<sup>361</sup>. De este modo, parece que se incluyen los conflictos armados tanto internacionales como no internacionales y puede que sea apropiado que el tema se mantenga en esa línea. No obstante, el orador comparte la preocupación expresada por el Sr. Kolodkin de que los proyectos de principio no distingan entre ambos. Puede que resulte demasiado simplista tratar de abarcar ambos tipos de conflicto armado sin tener en cuenta las diferentes normas que pueden ser de aplicación y los diferentes actores involucrados. El futuro Relator Especial tendrá que seguir analizando este asunto.

10. En cuanto a los nueve proyectos de principio propuestos por la Relatora Especial en su tercer informe, es importante, si bien no resulta particularmente fácil en estos momentos, verlos junto con los proyectos de principio aprobados provisionalmente por el Comité de Redacción en 2015. Por ello, sería útil que el Comité pudiera disponer de un documento que combinara, en el orden correcto, los textos aprobados en 2015 y los examinados en el actual período de sesiones.

11. Como han señalado el Sr. Park y otros colegas, la Relatora Especial no ha incluido materiales que dispongan que los Estados hayan de adoptar o deban adoptar las medidas preventivas previstas en el proyecto de principio I-1. En los párrafos 187 a 238 del informe se hace una breve descripción de algunos casos, pero es difícil ver qué relación existe entre ellos y el proyecto de principio I-1, motivo por el cual el orador duda de si se debe remitir el proyecto de principio al Comité de Redacción. Asimismo, no queda totalmente clara la relación entre ese proyecto de principio y los demás proyectos de la primera parte. Debería aclararse si los proyectos de principio I-2, I-3 y I-4 son formas de aplicación del proyecto de principio I-1. Al igual que otros miembros, el orador alberga serias dudas con respecto al proyecto de principio I-3, al que acompaña tan solo una breve explicación en el informe, en vista de que no parece que los acuerdos sobre el estatuto de las fuerzas y sobre el estatuto de las misiones guarden estrecha relación con los conflictos armados. En el proyecto de principio I-4, quizás se deba definir el término «operaciones de paz» a los efectos del proyecto de principios, o al menos explicarlo en el comentario.

12. En cuanto al proyecto de principio III-1, el orador comparte con el Sr. Forteau que un estudio de los acuerdos de paz suscritos entre Estados puede sentar las bases de un proyecto de principio mejor, pero en estos momentos esa información no está a disposición de la Comisión. El proyecto de principio III-2, que es meramente una declaración política, tal y como ha sugerido el Sr. Hmoud, podría remitirse al Comité de Redacción. No obstante, puede que sea necesario modificar parcialmente el párrafo 2, puesto que su formulación actual, en

particular la alusión a las «operaciones futuras», parece dar a entender que el párrafo corresponde a la fase preventiva y no a la fase posterior al conflicto. El Comité de Redacción tendrá que examinar los proyectos de principio III-3 y III-4 con gran detenimiento, incluidas la relación que tienen entre sí, la cuestión de sus destinatarios y la de si la Comisión debe intentar enumerar los restos de guerra. El orador coincide con quienes han dicho que el proyecto de principio III-5 requiere mayor precisión. Tal y como ha apuntado el Sr. McRae, puede que los Estados no estén en condiciones de dar acceso a información mantenida en secreto por motivos de seguridad nacional. Aunque el proyecto de principio no añade nuevas obligaciones a las que ya existen en derecho internacional, y puede ser, por tanto, aceptable, hay que especificar a qué fase de los conflictos armados se aplica. Su ubicación en la tercera parte del proyecto de principios sugiere que se aplica únicamente a la fase posterior al conflicto.

13. No está nada claro cómo encaja en el tema el proyecto de principio IV-1 relativo a los derechos de los pueblos indígenas. Ni el breve comentario al respecto que figura en el informe ni el propio proyecto de principio propuesto hacen referencia específicamente a los conflictos armados. Tal y como se ha dicho en debates anteriores, el tema que se examina no es el foro para analizar la cuestión general del derecho internacional aplicable a los pueblos indígenas. Si ha de incluirse un proyecto de principio al respecto, debe basarse en un análisis más riguroso de cuestiones específicas relacionadas con los pueblos indígenas, los conflictos armados y la protección del medio ambiente. A falta de tal análisis, el orador ve difícil pronunciarse sobre el proyecto de principio en cuestión. Entre otras cosas, podría llevar a preguntarse por qué la Comisión no elabora directrices sobre otros grupos particularmente vulnerables que también pueden verse afectados por los conflictos armados.

14. El ambicioso futuro programa de trabajo expuesto en los últimos párrafos del informe pone de manifiesto que queda mucho por hacer antes de ultimar la primera lectura de los proyectos de principio. La inclusión del tema de la responsabilidad por los daños al medio ambiente en relación con los conflictos armados, como han sugerido varias personas, podría hacer que el ejercicio fuera mucho más prescriptivo. ¿Hay algún motivo para establecer una *lex specialis* con respecto a la responsabilidad de los Estados? ¿No se puede presuponer que el proyecto de artículos de la Comisión sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos<sup>362</sup> se aplica en este ámbito, como en la mayoría de los demás? De cualquier modo, habría que tener en cuenta la responsabilidad, en su caso, al final del tema, cuando se haya aclarado la forma general de los proyectos de principio. El orador está de acuerdo en que la cuestión de la protección del medio ambiente durante la ocupación, suscitada por el Sr. Hmoud, es importante, pero no queda claro dónde encajaría en el esquema general de los proyectos de principio.

<sup>361</sup> *Anuario...* 2015, vol. II (segunda parte), pág. 68, párr. 134.

<sup>362</sup> Véase el texto del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos aprobado por la Comisión y los comentarios correspondientes en *Anuario...* 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, págs. 26 y ss., párrs. 76 y 77. Véase también la resolución 56/83 de la Asamblea General, de 12 de diciembre de 2001, anexo.

15. El orador agradece de nuevo que la Relatora Especial haya celebrado consultas con organizaciones internacionales y regionales y coincide plenamente con ella en la necesidad de que los Estados sigan facilitando ejemplos de legislación y jurisprudencia nacionales pertinentes.

16. Está de acuerdo en que se remitan los proyectos de principio al Comité de Redacción, con la posible excepción de los proyectos de principio I-1 y IV-1.

17. El Sr. WAKO desea felicitar a la Relatora Especial por presentar su tercer informe dentro del plazo que propuso en su informe preliminar en 2014<sup>363</sup>. Si bien coincide con el Sr. Forteau en que sería preferible que la Comisión tuviera ante sí una media de cuatro o cinco proyectos de texto propuestos en un informe, se entiende la decisión de la Relatora Especial de proponer nueve proyectos de principio en el presente informe dado el tiempo que ha dedicado al tema y habida cuenta de que no se presenta a la reelección. Aunque la Relatora Especial ha realizado una investigación concienzuda y ha celebrado consultas con numerosos órganos, queda mucho por hacer en un ámbito que evoluciona con rapidez.

18. Hace tan solo 40 años, en 1976, se aprobó la Convención sobre la Prohibición de Utilizar Técnicas de Modificación Ambiental con Fines Militares u Otros Fines Hostiles, a la que siguió un año más tarde el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I). Como ha reconocido la Relatora Especial, las disposiciones de ambos instrumentos, que fueron las primeras en prever explícitamente la protección del medio ambiente en los conflictos armados, reflejan los intereses y las preocupaciones de carácter medioambiental de la comunidad internacional en ese momento.

19. El derecho ambiental internacional daba sus primeros pasos en 1976, pero ya no se podían dejar de lado los problemas medioambientales. Si bien no se pueden identificar pruebas de derecho internacional consuetudinario relevante, sí las hay que apuntan a una mayor sensibilización y una clara ambición de los Estados y las organizaciones internacionales por tener en cuenta las consideraciones ambientales al planificar y llevar a cabo operaciones militares en tiempos de paz. El hecho de que la degradación medioambiental repercuta en el goce de los derechos humanos no supone necesariamente que exista una norma de derecho internacional consuetudinario que establezca un derecho humano individual a un entorno limpio.

20. No obstante, se están dando pasos a gran velocidad y podría decirse que África está a la cabeza. La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos dispone que todos los pueblos tienen derecho a un medio ambiente general satisfactorio que favorezca su desarrollo. En Kenya, la Constitución de 2010 establece, entre otras cosas, que todas las personas tienen derecho a un medio ambiente limpio y saludable, que el Estado debe poner fin a los procesos y las actividades que puedan poner en peligro el medio ambiente y que todas las personas y todos los grupos pueden pedir ante los tribunales una reparación

por vulneraciones del derecho a un medio ambiente limpio y saludable, sin tener que demostrar que tienen derecho a personarse. Así pues, la Comisión se encuentra ante un caso de desarrollo progresivo de derecho internacional. En este sentido, es una pena que muchos Estados Miembros no cooperen facilitando información sobre legislación, medidas y políticas ambientales.

21. Los proyectos de principio propuestos reflejan nuevas tendencias en el ámbito del derecho ambiental. No obstante, hay que tener cuidado de no abordar cuestiones medioambientales más amplias y mantenerse dentro del alcance del tema. El tema es complejo ya que se ocupa de la intersección entre el derecho de los conflictos armados, el derecho ambiental, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario internacional. Por ello, es tentador elaborar proyectos de principio que se refieran al derecho ambiental general y no al derecho ambiental en el contexto de los conflictos armados, y ocuparse del derecho que se aplica en tiempos de paz en lugar del derecho que se aplica durante un conflicto armado o después de él. La Comisión se enfrenta al reto de velar por que los proyectos de principio entren dentro del alcance del tema.

22. Ahora bien, hay otros retos relacionados con los proyectos de principio. En primer lugar, la Relatora Especial dijo en su informe preliminar que era probable que el tercer informe contuviera un número limitado de directrices, conclusiones o recomendaciones. No obstante, en última instancia, ha formulado proyectos de principio. A este respecto, el orador coincide con el Sr. Candioti en que la Comisión tiene que adoptar un enfoque sistemático con respecto al uso de los términos para los proyectos de texto.

23. En segundo lugar, la Comisión acordó al inicio que la definición básica de los conflictos armados sería más amplia que la que se había utilizado en otros informes a fin de abarcar situaciones en las que tenía lugar un conflicto armado sin la intervención de un Estado. Con ello, se garantizaría la inclusión de los conflictos armados no internacionales. No obstante, en los proyectos de principio propuestos, la Relatora Especial no parece haber distinguido entre conflictos armados internacionales y no internacionales, ni entre actores estatales y no estatales. Al presentar su tercer informe, la Relatora Especial dijo que, en futuros informes, podría valer la pena ocuparse de la responsabilidad y la práctica de los actores no estatales y los grupos armados organizados en los conflictos armados internacionales. Ello plantea la cuestión de si los proyectos de principio tendrían que modificarse una vez que se haya abordado la cuestión, si tendría que suspenderse el examen de los proyectos de principio hasta ese momento y si debería dividirse el informe en dos partes, una que abordara los conflictos armados internacionales y otra los conflictos armados no internacionales.

24. En tercer lugar, coincide con el Sr. Peter en que, si bien la Relatora Especial ha ubicado el proyecto de principio IV-1 en el contexto de los pueblos indígenas, sus tierras, el medio ambiente y el principio del consentimiento libre, previo e informado, ese contexto es demasiado restrictivo y débil para servir de base a un asunto tan importante. También está de acuerdo en que

<sup>363</sup> *Anuario...* 2014, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/674.

el informe de la Relatora Especial no ha hecho justicia al tema antes de llegar al proyecto de principio, que es probablemente el motivo por el que varios miembros de la Comisión han dicho que el proyecto de principio queda fuera del alcance del tema, y en que existe una gran cantidad de información disponible a la que se podía haber acudido para justificar la inclusión de una versión ligeramente modificada del proyecto de principio IV-1.

25. De la respuesta de otros miembros al informe se desprende claramente que el tema debe seguir formando parte del programa de trabajo de la Comisión. Las creencias cristianas del orador sustentan sus opiniones acerca del origen y la importancia del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho ambiental internacional. En el futuro, se recordará sobre todo a la Comisión por su contribución a la protección de los derechos humanos y el medio ambiente. La Comisión tiene que encontrar a alguien que se ocupe del mandato encargado a la Relatora Especial. Esa persona debe estar plenamente comprometida con la protección del medio ambiente y debe asumir la tarea de cumplir el mandato no solo como un deber, sino como un llamamiento.

26. Para concluir, el orador recomienda que se remitan todos los proyectos de principio al Comité de Redacción, que debe recomendar también la forma de continuar con el tema.

*El Sr. Saboia (Vicepresidente) ocupa la Presidencia.*

27. El Sr. VALENCIA-OSPINA da las gracias a la Relatora Especial por su tercer informe y dice que desea abordar dos cuestiones importantes cuya aclaración redundará en beneficio de la labor futura de la Comisión. La primera es la distinción entre el entorno natural y el medio humano y la segunda se refiere a la delimitación temporal de las fases segunda y tercera del tema, es decir, durante el conflicto armado y después de este.

28. En relación con la primera cuestión, el tratamiento que ha hecho la Comisión del tema en períodos de sesiones anteriores ha dado la impresión de que su labor se centraba en la protección del medio ambiente natural, sin tener en cuenta el valor pecuniario o la utilidad del medio ambiente natural para los seres humanos. En un informe de 2009 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) titulado *Protecting the Environment during Armed Conflict*<sup>364</sup> [La protección del medio ambiente durante los conflictos armados], que dio pie en última instancia a que la Comisión se ocupara del tema, se distingue el medio ambiente, que tiene un valor intrínseco, de los recursos naturales, que son de algún modo útiles o agotables. En la sección de los proyectos de principio relativa a los términos empleados que debatió la Comisión en 2015, se empleó una definición del medio ambiente que incluía «los recursos naturales, tanto abióticos como bióticos»<sup>365</sup>, pero no se hizo alusión alguna a su utilidad.

<sup>364</sup> D. Jensen y S. Halle (eds.), *Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law*, Nairobi, PNUMA, 2009.

<sup>365</sup> *Anuario...* 2015, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/685 (segundo informe de la Relatora Especial sobre la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados), anexo I, pág. 187.

29. Sorprendentemente, el tercer informe de la Relatora Especial se centra principalmente en el medio ambiente como recurso natural útil, en la medida en que es agotable y valioso, y en el medio ambiente como el «medio humano». El cambio de enfoque es evidente en todo el informe, pero particularmente en la sección dedicada a las causas judiciales y las sentencias, en la que la Relatora Especial analiza fundamentalmente causas en las que se describe el medio ambiente por su valor económico. Las causas versan sobre la explotación ilegal de recursos naturales, la privación individual o colectiva de la propiedad y la pérdida de utilidad de las tierras. Lo mismo se puede afirmar del análisis que hace la Relatora Especial de la labor de las comisiones de indemnización, con la destacada excepción de la Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas, que concedió una indemnización por «daños puramente ambientales».

30. Varias de las causas mencionadas hacen referencia al vínculo específico entre los pueblos indígenas y las tierras que habitan. El informe dedica una sección y uno de los proyectos de principio propuestos a los pueblos indígenas. Si bien el orador apoya plenamente los derechos de los pueblos indígenas, enunciados, por ejemplo, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas<sup>366</sup>, coincide con varios de los oradores precedentes en que el presente tema no es el marco adecuado para analizar y reiterar esos derechos, cuyo fundamento radica en consideraciones de derechos humanos y cuya pertinencia para la protección del medio ambiente está supeditada a que el medio ambiente pueda ser de valor para los pueblos indígenas. El informe no demuestra ninguna relevancia especial de esos derechos en relación con los conflictos armados, del mismo modo que el proyecto de principio IV-1, relativo a los derechos de los pueblos indígenas, no hace sino reafirmar derechos ya enunciados en instrumentos de derecho internacional de pertinencia más directa.

31. Lo mismo cabe decir de la manera en que se aborda en el informe la cuestión del acceso a la información y del intercambio de esta. El intento de justificar el acceso a la información como un derecho humano no es pertinente para el enfoque del tema, a saber, la protección del medio ambiente. El proyecto de principio III-5, que se ocupa de tal cuestión, dispone que «los Estados y las organizaciones internacionales concederán acceso a la información y compartirán esta con arreglo a sus obligaciones en virtud del derecho internacional». Esa formulación no parece ser ejemplo ni de codificación ni de desarrollo progresivo del derecho internacional. Por una parte, no se aporta información concreta sobre la naturaleza de las obligaciones a las que se alude en el proyecto de principio y, por otra, no se menciona ningún elemento nuevo que se esté desarrollando.

32. El informe tampoco parece ser el lugar apropiado para hablar de la remoción de minas y la protección de los seres humanos, que no guarda ninguna relación aparente con la protección del medio ambiente como tal. El «medio humano», en particular, ya goza de amplia protección en derecho internacional, tanto en tiempos de paz

<sup>366</sup> Resolución 61/295 de la Asamblea General, de 13 de septiembre de 2007, anexo.

como durante un conflicto armado. Algunos ejemplos de esa protección son el artículo 1, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, en el contexto de los conflictos armados, la criminalización de la destrucción deliberada de la base natural que sirve de sustento.

33. El alcance del tema no debe limitarse a reiterar la protección de la que ya gozan partes útiles del medio ambiente, sino que, en línea con los trabajos de la Comisión sobre el tema de años anteriores, debe abarcar la protección del medio ambiente con independencia de su utilidad o valor económico. El orador suscribe los comentarios presentados por Suiza, que se resumen en los párrafos 85 a 90 del informe. A diferencia de otros Estados, Suiza destaca la distinción entre la protección de los objetos indispensables para la supervivencia de la población civil, por un lado, y la protección del medio ambiente, por otro.

34. En cuanto a la delimitación temporal de las fases segunda y tercera, comparte la inquietud expresada por varios miembros de la Comisión. La Relatora Especial ha dividido la labor sobre el tema fundamentalmente según un eje temporal, con tres fases diferenciadas (antes de un conflicto armado, durante el conflicto y después de este), pero ha dejado la división entre las fases bastante abierta. Al mismo tiempo, hace que el derecho predominantemente aplicable dependa de la fase correspondiente. Por ejemplo, en relación con la segunda fase, la Relatora Especial basa su labor en la suposición de que durante, pero solo durante, un conflicto armado se aplica el derecho internacional humanitario como *lex specialis*, mientras que no sucedería lo mismo en las otras fases, en las que no hay ningún conflicto armado que dé pie a la aplicación del derecho internacional humanitario.

35. Parece ilógico que la Relatora Especial haya optado por comenzar su examen de las normas de especial pertinencia aplicables a las situaciones posteriores a un conflicto analizando la labor previa de la Comisión sobre los efectos de los conflictos armados en los tratados. Los conflictos armados finalizados quedan fuera del ámbito de aplicación del proyecto de artículos aprobado en 2011<sup>367</sup>, en el cual se entiende por «conflicto armado» una situación en la que se recurre a la fuerza armada entre Estados o a la fuerza armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados. Por ello, hay que distinguir claramente las fases temporales e identificar el derecho aplicable en cada una de ellas.

36. El orador comparte la preocupación expresada por el tratamiento que hace la Relatora Especial de las misiones de mantenimiento de la paz bajo mandato de las Naciones Unidas. Los principios básicos de las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas las distinguen radicalmente de los conflictos armados en su definición a los efectos del tema. Esas misiones no conllevan el uso de la fuerza por parte de los Estados. Por ello, la inclusión del mantenimiento de la paz dentro del

alcance del tema puede poner en peligro la viabilidad y la utilidad de la labor de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en su conjunto.

37. Para concluir, el orador es partidario de que se remitan los proyectos de principio al Comité de Redacción, con la posible excepción del proyecto de principio IV-1, en el entendimiento de que el tema se centrará fundamentalmente en la protección del medio ambiente.

38. El Sr. EL-MURTADI SULEIMAN GOUIDER dice que el excelente trabajo que ha realizado la Relatora Especial, en particular las abundantes referencias que ha incluido, constituirá una muy buena base para la labor de la persona que asuma sus funciones. Dada la frecuencia cada vez mayor de los conflictos no internacionales en el mundo y sus repercusiones en el medio ambiente, se debería prestar más atención a la segunda fase, la del conflicto armado propiamente dicho, que a las otras fases. No obstante, es imposible establecer marcos completamente estancos, y las opiniones sobre su aplicación difieren, en particular en relación con la protección de los pueblos indígenas y los recursos naturales.

39. El informe examina una serie de ejemplos de práctica internacional general en relación con los conflictos armados y sus consecuencias desde la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Declaración de Estocolmo)<sup>368</sup>. No obstante, ha resultado difícil recabar información de los Estados y las organizaciones africanas. La Relatora Especial ha hecho hincapié en la necesidad de que haya más contactos y consultas en la labor que se lleva a cabo en el futuro, y convendría que la Comisión reiterara el llamamiento a los Estados para que facilitaran más información sobre su práctica.

40. Podría resultar útil que las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a la protección del medio ambiente y los recursos naturales en los conflictos armados recordaran los aspectos negativos de situaciones específicas en las que el Consejo permitió la intervención militar. La aprobación de esas decisiones no impidió el estallido de nuevos conflictos, y el medio ambiente y los recursos naturales se convirtieron en las víctimas silenciosas. A pesar de que existe legislación nacional para proteger el medio ambiente, a menudo los conflictos armados vienen acompañados de un debilitamiento del aparato del Estado y de la legislación medioambiental, y se impide que los que intentan defender el medio ambiente alcen la voz. Las consideraciones medioambientales a largo plazo han pasado a un segundo plano en beneficio de las consideraciones a corto plazo. Así, el reto que tiene ante sí la comunidad internacional es demostrar que, en la práctica, se puede dar cumplimiento a las disposiciones legales y los compromisos de protección de los civiles y el medio ambiente, al margen de consideraciones políticas inmediatas.

41. El orador espera que quien suceda a la Relatora Especial pueda ocuparse de algunos aspectos importantes planteados en el presente informe, como la protección del

<sup>367</sup> Véase el texto del proyecto de artículos sobre los efectos de los conflictos armados en los tratados aprobado por la Comisión y los comentarios correspondientes en *Anuario... 2011*, vol. II (segunda parte), págs. 118 y ss., párrs. 100 y 101. Véase también la resolución 66/99 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 2011, anexo.

<sup>368</sup> *Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972* (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: S.73.II.A.14), primera parte, cap. I.

medio ambiente durante la ocupación y la responsabilidad de los actores no estatales en los conflictos armados no internacionales. También hace falta que haya un debate y un contacto más estrecho con las organizaciones competentes y que se intensifiquen los esfuerzos para recabar más información sobre la opinión y la práctica de los Estados.

42. Los proyectos de principio que figuran en el anexo I del informe sin duda ayudarán al Comité de Redacción en su labor. La interdependencia de las diferentes fases del tema favorecerá un enfoque exhaustivo e integral de los proyectos de principio. Para concluir, el orador desea el mayor de los éxitos en el futuro a la Relatora Especial.

43. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ desea dar las gracias a la Relatora Especial por su informe, que analiza la fase posterior al conflicto de forma detallada y sistemática, así como algunos aspectos del período anterior al conflicto. El informe ofrece a la Comisión una visión relativamente completa del tema, lo que resulta especialmente importante dado que la Comisión se acerca al final del quinquenio y no podrá beneficiarse en el próximo quinquenio del conocimiento profundo que tiene la Relatora Especial. La oradora celebra que se hayan incluido en el informe secciones dedicadas a los debates mantenidos en el seno tanto de la Comisión como de la Sexta Comisión y a las contribuciones que hicieron llegar por escrito los Estados Miembros, puesto que sirven de marco de referencia para el resto del informe. También desea destacar el anexo II, ya que la inclusión de una bibliografía seleccionada sentará una sólida base para la labor futura de la Comisión y del sucesor de la Relatora Especial.

44. El sistema seguido por la Relatora Especial para tratar algunos de los temas que aborda en el informe es un tanto difícil de entender, en especial el capítulo II, en el cual se refiere indistintamente a la fase anterior al conflicto y a la fase posterior al conflicto, a pesar de que la sección se titula «Normas particularmente pertinentes aplicables en situaciones posteriores a un conflicto». No obstante, la Relatora Especial ha contribuido a aclarar algunos aspectos en su intervención.

45. Aunque la gran cantidad de práctica analizada en el informe tiene interés y pertinencia, en ocasiones los elementos de la práctica se presentan de una manera un tanto general y abstracta y no siempre es fácil conectar directamente la práctica mencionada con el tema o el proyecto de principio al que sirve de sustento. Por ello, podría resultar interesante que la Relatora Especial seleccionara la práctica más específicamente referida a cada proyecto de principio a efectos de incluirla en los respectivos comentarios, de modo que se haga más explícita la contribución de cada elemento al proyecto de principio concreto en cuestión.

46. Tal y como mencionó la oradora en el anterior período de sesiones, el empleo del término «principio» plantea una serie de problemas sobre su significado preciso, su naturaleza y sus efectos jurídicos. En este período de sesiones, se ha suscitado la cuestión en relación con los métodos de trabajo de la Comisión y la necesidad de distinguir claramente entre proyectos de artículo, proyectos de principio y proyectos de directriz. A juicio de la

oradora, la relación entre estas tres categorías se ha de entender en la lógica de una línea decreciente del componente de normatividad de las propuestas. Por tanto, deberían elegirse una u otra en función del contenido más o menos prescriptivo que la Comisión quiera atribuir a cada uno de sus trabajos. Quizás se podría abordar el tema en el próximo quinquenio en conexión con los métodos de trabajo, máxime cuando cada vez se emplean más y más formatos diversos para presentar los temas y los títulos.

47. En cuanto a los proyectos de principio, si bien está de acuerdo con el contenido del proyecto de principio I-1, hay que aclarar tanto el contenido como la finalidad última de las medidas que en él se mencionan, ya que no queda claro si el calificativo «preventivas» se refiere a todas las medidas que se citan (legislativas, administrativas, judiciales y otras) o a una categoría concreta de medidas. Debería incluirse el proyecto de principio en la fase anterior al conflicto solo si el término «preventivas» tiene vocación de generalidad. En otro caso, las medidas podrían corresponderse con cualquiera de las fases y, por tanto, deberían incluirse en una parte introductoria. Asimismo, el título, «Aplicación y cumplimiento», no guarda relación con el contenido del proyecto de principio y debería modificarse, lo que quizás se pueda llevar a cabo más adecuadamente en el Comité de Redacción.

48. En relación con el proyecto de principio I-3, la oradora no coincide plenamente con otros miembros de la Comisión en que se trate de una cuestión que no guarda relación con el tema objeto de examen, en especial a la luz de los ejemplos que figuran en el informe. Aunque sea posible que los acuerdos sobre el estatuto de las fuerzas y sobre el estatuto de las misiones a los que se hace alusión en el proyecto de principio no se refieran directamente a situaciones de conflicto armado, no se puede descartar la posibilidad de que los destinatarios de esos acuerdos se vean envueltos en un conflicto o en alguna forma de intervención militar que incida en el medio ambiente. En todo caso, debería eliminarse la última frase del proyecto de principio, ya que la mención a «medidas preventivas, evaluaciones de los efectos y medidas relativas a la restauración y la limpieza» puede inducir a confusión respecto de la fase temporal a que se refiere el proyecto de principio. La descripción de las disposiciones que podrían incluirse en esos acuerdos tendría mejor cabida en el comentario.

49. La oradora comparte la preocupación expresada por algunos miembros sobre la inclusión del proyecto de principio I-4 en la sección dedicada a la fase anterior al conflicto. Aunque la propuesta material contenida en el principio es válida como punto de partida y es conforme con los desarrollos recientes en el ámbito de las operaciones de mantenimiento de la paz, la referencia expresa a la necesidad de adoptar medidas para «prevenir, mitigar y remediar las consecuencias ambientales nocivas» dota al proyecto de principio de una dimensión horizontal e intertemporal. Por tanto, sería preferible incluirlo como un proyecto de principio general aplicable a todas las fases, quizás trasladándolo a la cuarta parte del informe.

50. Si bien la idea que subyace al proyecto de principio III-1 es aceptable, sería útil revisar la redacción para definir de forma más precisa el alcance de la recomendación,

tanto en términos materiales como subjetivos. En concreto, las palabras «se alienta», la referencia genérica al «conflicto armado» sin otros calificativos y la posible incidencia de la recomendación en actores no estatales involucrados en un conflicto no internacional son algunos aspectos que deben tenerse en consideración en la formulación revisada.

51. Podría suprimirse el segundo párrafo del proyecto de principio III-2, puesto que en el proyecto de principio I-4 ya se han tenido en cuenta las consideraciones ambientales en las operaciones de paz. Tanto el proyecto de principio III-3 como el proyecto de principio III-4 son aceptables en líneas generales. No obstante, es necesaria una revisión del proyecto de principio III-3, párrafo 1, a fin de indicar quiénes son los destinatarios de la obligación en él enunciada y de hacerlo más comprensible en la versión en español para quienes no están familiarizados con el tema.

52. El proyecto de principio III-5 combina dos elementos distintos, el acceso a la información y el intercambio de información, que merecen un tratamiento separado. Asimismo, el principio está definido en términos demasiado amplios, ya que los Estados y las organizaciones internacionales pueden tener buenas razones, como la seguridad, para no dar acceso a determinada información o no compartirla. Por tanto, el alcance del proyecto de principio debería ser modificado teniendo este aspecto en cuenta. Por último, el proyecto de principio tiene un carácter general, por lo que podría ser aplicado en cualquiera de las fases; por ello, encontraría mejor ubicación en la cuarta parte del informe.

53. En los dos períodos de sesiones anteriores, la oradora afirmó que la cuestión de los pueblos indígenas debería ser tenida en cuenta en el presente tema, puesto que su conexión con la tierra y la preservación de sus medios tradicionales de vida exigen una especial protección del medio ambiente, incluso en relación con los conflictos armados, tal y como ha quedado recogido, en especial, en los artículos 29 y 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por ello, se congratula de que se aborde el tema en el proyecto de principio IV-1. Es adecuado incluir el proyecto de principio en una parte autónoma del proyecto, que, a su juicio, debería titularse «Principios de alcance general», puesto que la cuestión de los pueblos indígenas concierne a las tres fases del tema. No obstante, la oradora coincide con otros oradores en que la forma en que está redactado el proyecto de principio IV-1, en especial su párrafo 1, es demasiado general y abstracta y no pone de manifiesto la conexión entre pueblos indígenas y protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados. No obstante, esta conexión se refleja más adecuadamente en el párrafo 2 del proyecto de principio. En todo caso, el proyecto de principio podrá ser objeto de revisión en el Comité de Redacción y, con tal ocasión, podría considerarse igualmente la posibilidad de añadir una referencia a la necesidad de que los Estados y las organizaciones internacionales contemplen la especial posición de los pueblos indígenas en todo proyecto, estudio o plan relacionado con el medio ambiente y los conflictos armados que pueda afectarlos. Por último, en respuesta al

comentario del Sr. Peter de que la práctica examinada por la Relatora Especial se circunscribe a determinadas regiones y no refleja la presencia de pueblos indígenas en todos los continentes, la oradora considera que el material seleccionado por la Relatora Especial responde a la práctica disponible. No obstante, ayudaría que se incluyera en los comentarios una alusión a la dimensión mundial de las cuestiones de los pueblos indígenas.

54. La oradora desea concluir destacando la excepcional contribución de la Sra. Jacobsson a la labor de la Comisión, en general, y en sus trabajos como Relatora Especial sobre la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados, en particular. Sin duda, se echará de menos su presencia.

55. El Sr. AL-MARRI elogia a la Relatora Especial por el excelente trabajo que ha realizado al elaborar el informe, que se centra particularmente en un tema de gran interés para la comunidad internacional en su conjunto. En su tercer informe, la Relatora Especial afirma que las cuestiones medioambientales son un factor común que une a los Estados, ya sea en tiempos de paz o durante un conflicto armado. Los nueve proyectos de principio propuestos en el informe, algunos de los cuales son vinculantes y otros facultativos, han sido preparados exhaustivamente y deben ser remitidos al Comité de Redacción. Los proyectos de principio se centran en tres fases temporales (antes de un conflicto armado, durante un conflicto y después de este) y tratan, entre otras cuestiones, de los derechos de los pueblos indígenas en relación con los conflictos armados. El orador coincide con la Relatora Especial en que no hace falta aludir a la aplicabilidad de las convenciones en virtud de las cuales los Estados se han comprometido a proteger el medio ambiente durante un conflicto armado. También está de acuerdo con que se podría presentar la labor en forma de temas separados dentro del tema general de la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados. Debería examinarse la implicación de las partes en el conflicto a la luz del derecho de los conflictos armados y el derecho de la ocupación. La Comisión también debería estudiar los medios disponibles para la solución de controversias y para la atribución de responsabilidad por daños al medio ambiente; a este respecto se podría hacer referencia a los trabajos relevantes anteriores de la Comisión. La Comisión debería estudiar además la protección del medio ambiente en situaciones de conflicto armado entre actores no estatales, con especial referencia a las situaciones en el Afganistán, el Iraq y la República Árabe Siria.

56. El Sr. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ felicita a la Relatora Especial por su tercer informe, bien documentado, que examina la práctica, la jurisprudencia, la doctrina y los tratados, así como material procedente de una amplia variedad de fuentes primarias, como los sitios web oficiales de Estados y organizaciones internacionales. El tercer informe también incluye una bibliografía de gran utilidad.

57. El orador es partidario de dar al tema el alcance más amplio posible, de modo que abarque las tres fases de los conflictos armados, y de tomar como base el ordenamiento jurídico internacional en su conjunto, y no una rama determinada del derecho internacional, dado que



el derecho humanitario internacional, la *lex specialis* en situaciones de conflicto armado, puede solaparse con normas derivadas del derecho ambiental internacional, el derecho humanitario internacional, las normas internacionales de derechos humanos y el derecho penal internacional. Para garantizar la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados es, por tanto, imprescindible identificar las normas y principios de derecho internacional que se aplican a las diversas fases de los conflictos.

58. El orador está de acuerdo con la esencia de los nueve proyectos de principio propuestos por la Relatora Especial en su tercer informe. El capítulo II de este pone de manifiesto que el proyecto de artículos de la Comisión sobre los efectos de los conflictos armados en los tratados es relevante para el tema que se examina, especialmente el proyecto de artículo 3, que establece el principio general de que la existencia de un conflicto armado no da lugar *ipso facto* a la terminación de los tratados ni a la suspensión de su aplicación. Además, deja claro que el anexo del proyecto de artículos, que contiene una lista indicativa de las categorías de tratados que continuarían aplicándose, en todo o en parte, durante un conflicto armado, incluye expresamente los tratados relativos a la protección del medio ambiente. Las referencias a los comentarios a ese proyecto de artículos también resultan útiles.

59. El orador comparte con el Sr. McRae que, a fin de reflejar la naturaleza normativa de los proyectos de principio, no se debería «alentar» a los Estados a seguir una conducta determinada, sino decir que han o deben hacer algo, ya que la palabra «debería» es más apropiada cuando la disposición en cuestión constituya en general desarrollo progresivo del derecho internacional.

60. Al orador le complace que la Relatora Especial haya dedicado el proyecto de principio IV-1 a los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados, puesto que con ello se reconoce la intersección que puede llegar a darse entre diversas ramas del derecho internacional. Si bien la protección del medio ambiente es evidentemente importante en cualquier parte del planeta, hay que reconocer que, tal y como ha explicado el Sr. Saboia, en determinadas zonas del mundo los pueblos indígenas mantienen una relación especial con el medio ambiente. La destrucción de sus tierras tendrá graves consecuencias para la supervivencia cultural y física de esos pueblos, por lo que sus territorios merecen una protección especial antes, durante y después de los conflictos armados. A este respecto, el orador menciona el contenido de los artículos 29 y 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los artículos XIX y XXX de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas<sup>369</sup>, aprobada el 15 de junio de 2016 tras muchos años de negociaciones. La formulación del proyecto de

principio IV-1 debería ajustarse en mayor medida al contexto del tema y podría hacerse eco de la formulación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

61. En lo que al proyecto de principio I-1 se refiere, la Relatora Especial recurre a la práctica y la jurisprudencia para destacar la importancia de la adopción de normas de derecho interno en los Estados para mejorar la protección del entorno natural en relación con los conflictos armados, de conformidad con el derecho internacional. No obstante, al igual que el Sr. McRae, el orador considera que el proyecto de principio I-1 no debe limitarse necesariamente a las medidas preventivas, puesto que también concierne a la fase posterior al conflicto. Si bien el proyecto de principio I-3, relativo a los acuerdos sobre el estatuto de las fuerzas y sobre el estatuto de las misiones, tan solo tiene una relación indirecta con los conflictos armados, hay ciertamente una tendencia creciente a incluir en ese tipo de acuerdos disposiciones relativas a las responsabilidades ambientales que pueden ser de utilidad en la protección del medio ambiente, ya sea a nivel preventivo o de restauración y limpieza. El proyecto de principio I-4, relativo a las operaciones de paz, también refleja la práctica creciente en este ámbito de los Estados y las organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, de adoptar medidas para prevenir, mitigar y remediar las consecuencias ambientales nocivas de aquellas.

62. Hay que efectuar ajustes de redacción en los proyectos de principio de la tercera parte del informe. En los proyectos de principio III-3 y III-4, es conveniente aclarar la forma en que los restos de guerra en la tierra y en el mar pueden dañar el medio ambiente y prever la cooperación entre Estados y entre Estados y organizaciones internacionales.

63. El orador es partidario de remitir los nueve proyectos de principio al Comité de Redacción para que haga los ajustes de redacción correspondientes teniendo en cuenta los comentarios y las sugerencias expresadas en el debate en sesión plenaria.

64. En su futuro programa de trabajo, la Comisión debe tener presentes las novedades que se producen en el derecho internacional derivadas de la práctica de los Estados, la *opinio iuris*, la jurisprudencia y los tratados. Debe, asimismo, examinar más a fondo algunas cuestiones, incluyendo las relativas a la protección del medio ambiente durante la ocupación, la responsabilidad de los actores no estatales, los conflictos armados no internacionales, las indemnizaciones y las reparaciones. El futuro Relator Especial ha de seguir consultando con organizaciones internacionales como el PNUMA, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

65. Por último, el orador desea expresar su agradecimiento a la actual Relatora Especial, bajo cuya guía y liderazgo la Comisión ha logrado avanzar y hacer un aporte sustantivo y de gran utilidad práctica en el marco del desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional en este importante tema.

<sup>369</sup> Resolución 2888 (XLVI-O/16) de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, en *Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, Cuadragésimo sexto período ordinario de sesiones: Santo Domingo, República Dominicana, del 13 al 15 de junio de 2016, Actas y documentos*, vol. I (OEA/Ser.P/XLVI-O.2).

66. El Sr. KAMTO dice que la considerable labor de investigación llevada a cabo por la actual Relatora Especial será sin duda de gran utilidad para el próximo Relator Especial sobre el tema. No obstante, al igual que los Sres. Forteau, Park y Šturma, el orador expresa su asombro por la aparente amplitud del alcance del tema, hasta el punto de abarcar la protección de los derechos de los pueblos indígenas, los acuerdos de inversión, la protección del patrimonio cultural y el tipo de armas utilizadas en los conflictos armados. La división del tema en tres fases de igual importancia puede ser en parte la responsable de esa situación, dado que no se han marcado límites temporales estrictos para la primera y la última etapa. La primera fase debería limitarse a acontecimientos ligados estrechamente y de manera inmediata al inicio del conflicto armado, ya que de lo contrario se prestaría demasiada atención a la prevención de los daños al medio ambiente, un tema bastante diferente que tal vez requiera un examen por separado. Del mismo modo, la tercera fase debería circunscribirse a la repercusión directa de los conflictos armados en el medio ambiente. Ya se ha abordado la cuestión de los restos de naufragios en otros instrumentos jurídicos.

67. En segundo lugar, el paso de la protección del medio ambiente a la protección de los derechos humanos altera considerablemente el alcance y la naturaleza de las normas y los principios que se formulan. Nadie se opone a la protección de los pueblos indígenas pero, a los efectos del tema que aquí se examina, en el proyecto de principio IV-1 la Comisión no debería centrarse en sus derechos, sino en la especial protección de su entorno.

68. El orador suscribe la opinión de algunos oradores que lo han precedido según los cuales varios de los proyectos de principio no se basan en el razonamiento desarrollado en el informe y gran parte de la jurisprudencia citada no guarda relación con el tema. Los análisis del informe no avalan el proyecto de principio I-1, que además tiene una formulación demasiado amplia. El orador se pregunta por qué falta el proyecto de principio I-2. Al no sentar las bases del proyecto de principio I-3, la Relatora Especial da la impresión de que el texto expresa más un deseo personal que un principio emanado de la práctica o de los instrumentos internacionales vigentes. Y lo mismo se puede afirmar de los proyectos de principio I-4 y III-1. Este último no distingue entre conflictos armados internacionales y no internacionales. En la práctica, la alusión a la «restauración y protección del medio ambiente dañado por el conflicto armado» puede no representar más que deseos inalcanzables, puesto que cuesta imaginarse qué pueden hacer grupos armados nacionales que han participado en el conflicto para cumplir esa disposición. La formulación del proyecto de principio III-3 es muy vaga. El primer párrafo no especifica quién va a llevar a cabo las actividades en cuestión y no es realista exigir que se limpien, retiren y destruyan todas las minas sin demora. El segundo párrafo hace alusión a «las partes», presumiblemente las partes en el conflicto armado, en otras palabras, los Estados partes en un conflicto armado, lo cual quiere decir que excluye los conflictos armados no internacionales, a pesar de que constituyen la mayoría de los conflictos armados actuales.

69. El orador está a favor de que se remitan los proyectos de principio, salvo los proyectos de principio I-1, I-3, I-4, III-1 y III-3, al Comité de Redacción.

70. Durante diez años, ha admirado la elegancia mental de la Relatora Especial y su tenacidad para tratar de avanzar en temas relacionados con los derechos de la mujer y los derechos de determinadas categorías de personas vulnerables. Le desea el mayor de los éxitos en el futuro.

71. El Sr. CANDIOTI desea dar las gracias a la Relatora Especial por su tercer informe, que analiza en detalle muchos aspectos de la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados, al tiempo que proporciona abundante información sobre la práctica de los Estados, el derecho convencional, la jurisprudencia internacional y nacional y la *opinio iuris*, así como una bibliografía muy útil. La Relatora Especial ha adoptado un enfoque sumamente profesional ante un tema de extrema dificultad. Ha realizado una contribución muy valiosa al examen del tema que hace la Comisión y ha facilitado gran cantidad de material sobre el que es necesario que la comunidad internacional siga trabajando urgentemente. Su planteamiento de tres fases ha sido acertado. Todas las normas y recomendaciones que figuran en los proyectos de principio propuestos en su tercer informe promoverán el desarrollo del tema. El orador está convencido de que el Comité de Redacción prestará la debida atención a las diversas sugerencias formuladas con miras a mejorar la formulación.

72. El uso del término «principio» no resta importancia a las propuestas de la Relatora Especial. No obstante, la Comisión debe velar por que la forma final de las disposiciones se ajuste a su contenido. No debe confundir principios, en otras palabras, normas o estándares básicos y generales para la codificación o el desarrollo progresivo del derecho internacional, con recomendaciones de comportamientos aconsejables o deseables.

73. La Comisión ha recibido de la Asamblea General el mandato de codificar y desarrollar progresivamente el derecho relativo a la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados. Por ello, debe seguir adelante con la buena labor realizada hasta el momento a fin de cumplir con ese mandato.

74. Por último, el orador desea felicitar a la Relatora Especial por su compromiso con el estado de derecho en la comunidad internacional. También le desea el mayor de los éxitos en el futuro.

*Se levanta la sesión a las 12.50 horas.*

## 3322ª SESIÓN

*Lunes 18 de julio de 2016, a las 15.00 horas*

*Presidente:* Sr. Pedro COMISSÁRIO AFONSO

*Miembros presentes:* Sr. Al-Marri, Sr. Caflisch, Sr. El-Murtadi Suleiman Gouider, Sra. Escobar Hernández, Sr. Forteau, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sra. Jacobsson, Sr. Kittichaisaree, Sr. Kolodkin, Sr. Laraba, Sr. McRae, Sr. Murase, Sr. Murphy, Sr. Nolte, Sr. Park,